



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 98058/2012

AUTOS: “ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE AUTOMOTOR c/
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - D.G.I.
s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Que contra la resolución de la Dirección de Contenciosos de los Recursos de la Seguridad Social – AFIP- nro. 231/12 (DI RSS), que desestimó la solicitud de revisión interpuesta por la actora, con relación a la Resolución nro. 6102/11 (DV JB SS- DI FOSS), que en base al dictamen jurídico pertinente rechazó la impugnación contra la multa por mora en el pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social intimada mediante Acta de Infracción SCT/015/2011/00000662 correspondiente al período 9/08, se dedujo recurso de apelación en los términos de los arts. 9 de la ley 23.473, sustituido por art. 14 de la ley 26.063, 15 de la ley 18.820 y 39 bis del Decreto Ley 1285/58, texto conforme art. 26 de la ley 24.463.

De conformidad a las normas indicadas, la admisibilidad formal del remedio intentado, se halla supeditada a la presentación en tiempo oportuno y al cumplimiento del depósito previo. Respecto a este último recaudo, a fs. 87, obra nota de elevación que al mismo tiempo da cuenta del incumplimiento por parte del apelante, del recaudo referido.

Que en este orden el recurrente esgrime la imposibilidad de hacer frente a la erogación de la suma exigida atento la insuficiencia de rentabilidad y capacidad financiera. A efectos de acreditar los extremos invocados ofrece como prueba la realización de una pericia contable a realizar por la Contadora Patricia Pisera, en base a los puntos propuestos a fs. 73vta.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la

Fecha de firma: 20/04/2023

Alta en sistema: 04/05/2023

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#24894043#365104885#20230417103117243



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido, corresponde declarar la inadmisibilidad formal el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.

Por otra parte, más allá de lo actuado por este tribunal a fs. 95/102, resulta improcedente la producción de la prueba ofrecida con el recurso deducido ante una resolución que desestimó la impugnación de deuda, ya que exorbita la competencia que está atribuida a la C.F.S.S. en su carácter de instancia judicial de revisión (cfr. art. 8 de la ley 23.473, modificado por ley 24.463) (en igual sentido C.F.S.S., Sala I, “ASISTENCIA MÉDICA ZÁRATE S.R.L. c/ D.G.I.”, sentencia del 19/03/99, ver también ésta Sala sentencia interlocutoria del 23.06.2017 en la causa 97719/12 “Asociación Mutual Transporte Automotor c/Administración Federal de Ingresos Públicos –D.G.I. s/Impugnación de deuda”).

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente **inadmisible** el recurso interpuesto; y 2) sin costas en la Alzada. Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se deja constancia que la Vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

